

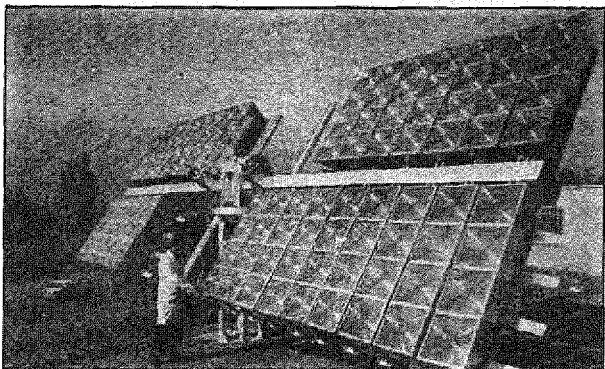
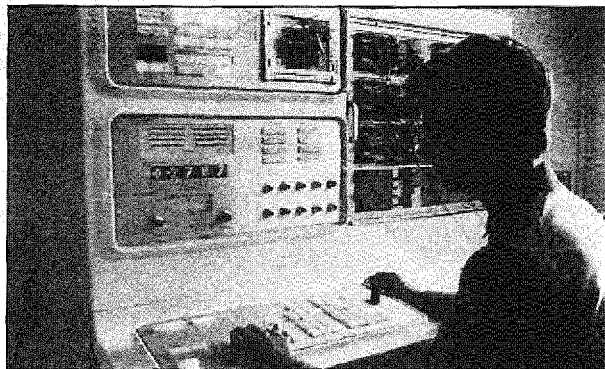
Promocionar y coordinar la investigación científica y técnica

La aceptación pasiva del contenido del Proyecto de Ley sobre Investigación Científica y Técnica, la financiación regular de los equipos de investigación, la promoción de la participación de la comunidad científica, etcétera, son, entre otros, algunos de los puntos analizados por José Antonio Martín Pereda, vicerrector de Investigación y Relaciones Externas, en el presente artículo, con motivo de la reciente aparición del citado Proyecto, emitido por el Ministerio de Educación y Ciencia

La Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, nombre, al parecer, último de la por todos conocida, desde el inicio de su gestación, como Ley de Ciencia, se hizo pública, como proyecto, el pasado mes de abril. Su aparición no ha originado, habida cuenta de su posible notable repercusión en las actividades científicas y tecnológicas de nuestro país, los comentarios en avalancha ni las opiniones más o menos enfrentadas que hubiera sido lógico esperar.

Los artículos en la Prensa han sido escasos, y las contestaciones, apenas nulas. Una especie de aceptación pasiva y apática ha cubierto con su manto a la mayor parte de la comunidad científica. La ausencia de acres oposiciones ha sido vista por algunos como una prueba de que su contenido no se enfrenta en absoluto a lo que se esperaba; a que, de alguna manera, las líneas maestras allí definidas están aceptadas por todos. Las las encomiásticas, por otra parte, también han brillado por su ausencia. De ambos hechos, como es lógico, cada uno puede hacer las interpretaciones que quiera. Pero lo fundamental, y esto es lo que quizá sí que están esperando todos, es que, al aparecer por primera vez una estructuración de las tareas científicas y tecnológicas en nuestro país, los resultados a que pueda dar lugar son más importantes que la forma con que se obtengan. De hecho, como se verá después, lo que se expone apenas se diferencia, más que en pequeños detalles, de las formas de actuar en otros países ya con largos años de actividad en este campo; las líneas maestras eran ya conocidas antes de ser desarrolladas y, como se ha dicho antes, lo más importante es el ponerla en funcionamiento de una manera tal que la frustración de la comunidad científica no suba en un punto más su cota actual, cota que cada año, por ser cada año mayor el número de los que se incorporan, es más alta.

El objetivo básico de la ley, recogido en su artículo primero, es simplemente "el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica" y para ello "se establecen los planes nacionales de investigación científica y desarrollo tecnológico". Estos planes



serán establecidos, coordinados y seguidos por una Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, "formada por representantes de los departamentos ministeriales y organismos de titularidad estatal con competencias en materia de investigación científica e innovación tecnológica que designe el Gobierno, que asimismo designará el ministro que haya de presidirla".

En un largo artículo segundo pasa a relacionar los objetivos de interés general hacia los que se orientarán estos planes. Su enumeración, aunque amplia, no es evidentemente exhaustiva. El intentar cubrir todos los posibles es algo que desde un punto de vista realista es imposible. Y así, por ejemplo, se nota en falta que, aunque se dice que un objetivo es el fomento de la creación artística, no aparece otro paralelo que mencione el fomento de la creación científica o tecnológica. Parece como si el énfasis en estos dos campos fuera tan sólo en aquellos aspectos en que pueden ser útiles para los otros apartados.

De hecho esto queda reflejado en el artículo tercero, donde aparecen los puntos que se habrán de tener en cuenta en la definición de los programas.

Un aspecto importante se señala en el artículo cuarto, donde, por primera vez, aparece constancia de la necesidad de una "financiación regular", "que haga posible el mantenimiento y la promoción de los equipos de investigación de calidad". Es de suponer que esta financiación no sea equivalente a la actualmente existente y conocida como FIU, cuya magnitud no es suficiente en muchos casos ni para mantener las suscripciones anuales, en cada Cátedra, a dos o tres revistas de calidad.

Los planes nacionales se detallan en los artículos cuatro y seis. Aparecen con carácter plurianual y se dividirán en Programas Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en Programas Sectoriales de los distintos Ministerios, en Programas de las

Comunidades Autónomas y en otros de Formación de Personal Investigador.

La Comisión Interministerial, además de elaborar el plan, asignará, entre otras funciones, los fondos a cada programa, coordinará a los distintos ministerios en sus tareas de investigación, evaluará su cumplimiento y elevará una Memoria anual.

Con el fin de promover la participación de la comunidad científica y de los agentes económicos y sociales en los planes nacionales se constituye un Consejo asesor, presidido por un ministro que designará el Gobierno. Sus funciones serán las de proponer objetivos, asesorar a la Comisión Interministerial, informar del impacto social y económico, formular propuestas de modificación de los planes nacionales y emitir informes.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, por otra parte, deberá evaluar el contenido tecnológico-industrial de aquellos proyectos en los que participan empresas industriales, así como promover la explotación industrial de las tecnologías desarrolladas por la Universidad.

Un hecho a considerar es cómo se ha tenido en cuenta la posible contratación de personal con cargo a los proyectos de investigación (artículos 11 y 17). Aparece el régimen laboral como única vía y el artículo 15. 1 a) del Estatuto de los Trabajadores como reglamento del pago de salarios y cargas sociales.

Finalmente, para promover la coordinación se crea el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, donde aparecen representantes de cada Comunidad Autónoma, y cuyas funciones son, como se ha dicho antes, las de intentar coordinar las diversas actividades, recursos y medios existentes para darles un mejor uso.

Como remate, aparecen las funciones de los organismos que, según el Proyecto de Ley, quedan regulados por ella en sus actividades. Son el CSIC, la antigua JEN, el IGME, el INTA y el IEO.

La Universidad, como elemento específico de la ley, aparece mencionada únicamente en cinco ocasiones y una más en las disposiciones adicionales.